



Procedimiento N°: TD/00740/2018

RESOLUCIÓN N°.: R/01417/2018

Vista la reclamación formulada el 19 de marzo de 2018 ante esta Agencia por doña **A.A.A.** contra **GOOGLE LLC** por no haber sido debidamente atendido su derecho de cancelación.

Realizadas las actuaciones procedimentales previstas en el artículo 117 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (en lo sucesivo, RLOPD), se han constatado los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 19 de marzo de 2018 tuvo entrada en esta Agencia reclamación de doña **A.A.A.** (en lo sucesivo, la parte reclamante) contra **GOOGLE LLC** por no haber sido debidamente atendido el derecho de cancelación.

Concretamente solicita que su nombre no se asocie a la siguiente url:

- *****URL.1**
- *****URL.2**

Con fechas del 22 de enero al 1 de marzo de 2018, la parte reclamante solicitó a Google Inc. la cancelación de sus datos personales que aparecen en las direcciones web ya referenciadas.

En dichos enlaces aparecen los datos de la parte reclamante publicados en un auto del Tribunal Constitucional, de marzo de 2003, en el que se Inadmite a trámite el recurso de amparo presentado por su representante.

Google Inc. comunica a la parte reclamante que, la información que dispone en la URL *****URL.1**, respecto a todas las circunstancias de las que se tiene conocimiento, siguen siendo relevantes para los fines del tratamiento de datos, por lo que, el resultado de búsqueda está justificado por interés general.

Google Inc. denegó su reclamación tras haber analizado que la información objeto de la reclamación había sido publicada por el Tribunal Constitucional, así mismo, considera que las URLs en cuestión, remiten información de interés público al enlazar con un auto de dicho Tribunal que desestima un recurso de amparo publicado en la web institucional.

SEGUNDO: Con fecha 6 de abril de 2018, se dio traslado de la citada reclamación a Google para que alegara cuanto estimara conveniente a su derecho, habiendo tenido entrada en esta Agencia un escrito con fecha 4 de mayo de 2018 en el que, en síntesis, manifiesta que:



Que por medio de dos correos electrónicos de fechas 27 y 28 de febrero de 2018 Google LLC denegó motivadamente su reclamación tras haber analizado que la información objeto de la reclamación había sido publicada por el Tribunal Constitucional, así mismo, considera que las URLs en cuestión, remiten información de interés público al enlazar con un auto de dicho Tribunal que desestima un recurso de amparo publicado en la web institucional.

Consideran que *“la AEPD carece de competencia material para ordenar a un buscador medidas que limiten el acceso a resoluciones del Tribunal Constitucional.”*

TERCERO: Examinadas las alegaciones formuladas por Google, se dan traslado de las mismas al interesado, acompañando la documentación justificativa por la cual se atiende el derecho solicitado, para que, en el plazo de quince días hábiles formule alegaciones que considere oportunas, cuyo plazo finalizó sin recibir respuesta

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La competencia para resolver la presente reclamación corresponde a la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, de acuerdo con el artículo 37.d), en relación con el artículo 36, ambos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (en lo sucesivo, LOPD).

SEGUNDO: El artículo 18.1 de la LOPD señala que *“Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la presente Ley pueden ser objeto de reclamación por los afectados ante la Agencia Española de Protección de Datos, en la forma que reglamentariamente se determine”*.

TERCERO: El artículo 16 de la LOPD dispone que:

“1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días.

2. Serán rectificadas o canceladas, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos.

3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión.

4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que deberá también proceder a la cancelación.



5. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado.”

CUARTO: Por lo que se refiere a la naturaleza del buscador como responsable de tratamiento, cabe señalar que un buscador es una herramienta que facilita al usuario de internet el acceso a determinadas páginas web. Para ello, la herramienta accede a una lista de enlaces previamente indexados y ofrece al usuario una relación de direcciones web que remiten a páginas en las que figuran las palabras seleccionadas por el usuario.

La Sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, en su apartado 28, declara que *“al explorar Internet de manera automatizada, constante y sistemática en busca de la información que allí se publica, el gestor de un motor de búsqueda recoge tales datos que extrae, registra y organiza posteriormente en el marco de sus programas de indexación, conserva en sus servidores y, en su caso, comunica y facilita el acceso a sus usuarios en forma de listas de resultados de sus búsquedas. Ya que estas operaciones están recogidas de forma explícita e incondicional en el artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46, deben calificarse de tratamiento en el sentido de dicha disposición, sin que sea relevante que el gestor del motor de búsqueda también realice las mismas operaciones con otros tipos de información y no distinga entre estos y los datos personales.*

(...)

Apartado 33:

Ahora bien, el gestor del motor de búsqueda es quien determina los fines y los medios de esta actividad y, así, del tratamiento de datos personales que efectúa el mismo en el marco de esta y, por consiguiente, debe considerarse responsable de dicho tratamiento en virtud del mencionado artículo 2, letra d.

(...)

Apartado 35:

Sobre este particular, procede poner de manifiesto que el tratamiento de datos personales llevado a cabo en el marco de la actividad de un motor de búsqueda se distingue del efectuado por los editores de sitios de Internet, que consiste en hacer figurar esos datos en una página en Internet, y se añade a él.

Apartado 41:

(...) la actividad de un motor de búsqueda, que consiste en hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado, debe calificarse de tratamiento de datos personales, en el sentido de dicho artículo 2, letra b), cuando esa información contiene

datos personales y, por otro, el gestor de un motor de búsqueda debe considerarse responsable de dicho tratamiento, en el sentido del mencionado artículo 2, letra d)."

Consecuentemente, el Tribunal de Justicia considera que el gestor del motor de búsqueda es el responsable del tratamiento de los datos al determinar los fines y los medios de su actividad.

QUINTO: En cuanto a la normativa aplicable cabe señalar lo siguiente:

El artículo 2 de la LOPD, señala en su apartado 1 su ámbito territorial de aplicación en los siguientes términos:

"Se regirá por la presente Ley Orgánica todo tratamiento de datos de carácter personal:

a) Cuando el tratamiento sea efectuado en territorio español en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento.

b) Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio español, le sea de aplicación la legislación española en aplicación de normas de Derecho Internacional público.

c) Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, salvo que tales medios se utilicen únicamente con fines de tránsito."

Este artículo traspone el artículo 4 de la Directiva 95/46/CE, que literalmente señala:

"Derecho nacional aplicable

1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones nacionales que haya aprobado para la aplicación de la presente Directiva a todo tratamiento de datos personales cuando:

a) el tratamiento sea efectuado en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento en el territorio del Estado miembro. Cuando el mismo responsable del tratamiento esté establecido en el territorio de varios Estados miembros deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que cada uno de dichos establecimientos cumple las obligaciones previstas por el Derecho nacional aplicable;

b) el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio del Estado miembro, sino en un lugar en que se aplica su legislación nacional en virtud del Derecho internacional público;

c) el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Comunidad y recurra, para el tratamiento de datos personales, a medios, automatizados o no, situados en el territorio de dicho Estado miembro, salvo en caso



de que dichos medios se utilicen solamente con fines de tránsito por el territorio de la Comunidad Europea.

2. En el caso mencionado en la letra c) del apartado 1, el responsable del tratamiento deberá designar un representante establecido en el territorio de dicho Estado miembro, sin perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el propio responsable del tratamiento.”

La Sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 13 de mayo de 2014, considera a tenor del artículo 4.1.a) de la Directiva 95/46, en sus apartados 55, 56, 57 y 60, lo siguiente:

“procede considerar que el tratamiento de datos personales realizado en orden al funcionamiento de un motor de búsqueda como Google Search, gestionado por una empresa que tiene su domicilio social en un Estado tercero pero que dispone de un establecimiento en un Estado miembro, se efectúa en el marco de las actividades de dicho establecimiento si este está destinado a la promoción y venta en dicho Estado miembro de los espacios publicitarios del motor de búsqueda, que sirven para rentabilizar el servicio propuesto por el motor.

En efecto, en tales circunstancias, las actividades del gestor del motor de búsqueda y las de su establecimiento situado en el Estado miembro de que se trate están indisolublemente ligadas, dado que las actividades relativas a los espacios publicitarios constituyen el medio para que el motor de búsqueda en cuestión sea económicamente rentable y dado que este motor es, al mismo tiempo, el medio que permite realizar las mencionadas actividades.

(...) la propia presentación de datos personales en una página de resultados de una búsqueda constituye un tratamiento de tales datos. Pues bien, toda vez que dicha presentación de resultados está acompañada, en la misma página, de la presentación de publicidad vinculada a los términos de búsqueda, es obligado declarar que el tratamiento de datos personales controvertido se lleva a cabo en el marco de la actividad publicitaria y comercial del establecimiento del responsable del tratamiento en territorio de un Estado miembro, en el caso de autos el territorio español.

(...) debe interpretarse en el sentido de que se lleva a cabo un tratamiento de datos personales en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable de dicho tratamiento en territorio de un Estado miembro, en el sentido de dicha disposición, cuando el gestor de un motor de búsqueda crea en el Estado miembro una sucursal o una filial destinada a garantizar la promoción y la venta de espacios publicitarios propuestos por el mencionado motor y cuya actividad se dirige a los habitantes de este Estado miembro.”

SEXTO: En relación a la posibilidad de ejercer el derecho de cancelación ante el buscador de Internet sin acudir al responsable del sitio web, la referida Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sus apartados 80 y 88, señala que *“un tratamiento de datos (...) efectuado por el gestor de un motor de búsqueda, puede afectar significativamente a los derechos fundamentales de respeto de la vida privada y de protección de datos personales cuando la búsqueda realizada sirviéndose de ese*



motor de búsqueda se lleva a cabo a partir del nombre de una persona física, toda vez que dicho tratamiento permite a cualquier internauta obtener mediante la lista de resultados una visión estructurada de la información relativa a esta persona que puede hallarse en Internet, que afecta potencialmente a una multitud de aspectos de su vida privada, que, sin dicho motor, no se habrían interconectado o sólo podrían haberlo sido muy difícilmente y que le permite de este modo establecer un perfil más o menos detallado de la persona de que se trate. Además, el efecto de la injerencia en dichos derechos del interesado se multiplica debido al importante papel que desempeñan Internet y los motores de búsqueda en la sociedad moderna, que confieren a la información contenida en tal lista de resultados carácter ubicuo (véase, en este sentido, la sentencia eDate Advertisin y otros, C-509/09 y C-161/10, EU:C2011:685, apartado 45).

(...) para respetar los derechos que establecen estas disposiciones, siempre que se cumplan realmente los requisitos establecidos en ellos, el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de esta páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí misma lícita.”

Consecuentemente, el tratamiento de datos de carácter personal que realiza el gestor de un motor de búsqueda permite que de un “nombre” se obtenga una lista de resultados que ofrezcan información sobre una persona que pueda afectar a su ámbito privado. Una vez que el interesado ha presentado su solicitud de cancelación de sus datos personales ante el motor de búsqueda, deberá examinarla y proceder, en su caso, a la supresión de los enlaces concretos de la lista de resultados, sin que previa o simultáneamente se tenga que acudir al responsable del sitio web.

SÉPTIMO: El procedimiento de Tutela de Derechos se instruye como consecuencia de la denegación de alguno de los derechos regulados en la normativa de protección de datos (acceso, rectificación, cancelación y oposición) cuando, una vez ejercidos ante el responsable del fichero cumplimentando todos los requisitos establecidos, éste no contesta en el plazo legalmente establecido, o si la respuesta ofrecida no atiende el derecho o no resulta satisfactoria para el interesado.

En el presente caso, del examen de la documentación aportada ha quedado acreditado que la parte reclamante ejerció el derecho de cancelación respecto de dos enlaces:

- *****URL.1**
- *****URL.2**

Respecto de enlaces, la parte reclamante tiene la posibilidad, si a su derecho conviene, de solicitar la cancelación ante la entidad reclamada y, si ésta no contesta o la respuesta es insatisfactoria, puede presentar ante esta Agencia reclamación por denegación de su derecho aportando la documentación acreditativa correspondiente, sin que se prejuzgue el resultado de la resolución que dicte este organismo.



OCTAVO: Respecto del derecho de cancelación ejercido ante Google LLC. debe analizarse la procedencia o no de atender, en el presente caso, la solicitud de que tras una búsqueda efectuada, su nombre no se vincule a determinados resultados.

En el presente caso, y teniendo en cuenta lo señalado en el Fundamento de Derecho anterior, en enero de 2018, la parte reclamante ejercitó el derecho ante Google en relación a las siguientes URL:

- *****URL.1**
- *****URL.2**

En dichos enlaces aparecen los datos de la parte reclamante publicados en un auto del Tribunal Constitucional, de marzo de 2003, en la que se inadmite a trámite el recurso de amparo promovido por la misma, en causa por un delito contra la salud pública.

La lista de resultados obtenida en una búsqueda a partir de un nombre, página web o información relativa a una persona, facilita la accesibilidad y difusión de la información a cualquier internauta que realice una búsqueda sobre el interesado, constituyendo una injerencia en el derecho fundamental al respeto de la vida privada del interesado.

De conformidad con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su apartado 99:

“Los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el sentido de que, al analizar los requisitos de aplicación de estas disposiciones, se tendrá que examinar, en particular, si el interesado tiene derecho a que la información en cuestión relativa a su persona ya no esté, en la situación actual, vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre, sin que la apreciación de la existencia de tal derecho presuponga que la inclusión de la información en cuestión en la lista de resultados cause un perjuicio al interesado. Puesto que éste puede, habida cuenta de los derechos que le reconocen los artículos 7 y 8 de la Carta, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados, estos derechos prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en acceder a la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate.”

Respecto a las alegaciones de Google en referencia a la no competencia de esta Agencia para ordenar a un buscador medidas que limiten el acceso a resoluciones del Tribunal Constitucional, cabe señalar que de conformidad con la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esta Agencia tiene competencia para instar a un buscador a que no asocie el nombre de un afectado a los



enlaces ofrecidos en los resultados de búsqueda, independientemente de que el interesado no se haya dirigido previamente al webmaster o responsable de la publicación en la web de origen, siempre que la información que aparece en los enlaces en cuestión, carezca de relevancia y de interés público. Asimismo, se recuerda que la información quedará preservada en la web de origen, de conformidad con la Sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de diciembre de 2014, que dispone lo siguiente:

“Por otro lado, la libertad de información se encuentra satisfecha por su subsistencia en la fuente, es decir, en el sitio web donde se publica la información por el editor, sin que el hecho de eliminar de la lista de resultados los vínculos a la página web objeto de reclamación por el afectado, impida que utilizando otros datos se llegue a la citada página web, pero no a partir de su nombre.”

Se ha comprobado por parte de esta Agencia que la misma aparece indexada por Google al realizar una búsqueda del nombre de la parte reclamante en dichos buscadores.

NOVENO: Respecto al ejercicio del derecho de cancelación interpuesto por la parte reclamante referido a una URL del Tribunal sobre un auto, cabe señalar lo siguiente:

En este caso, no se cuestiona la publicidad de las resoluciones del Tribunal Constitucional, ni sobre la exigencia constitucional basada en la máxima difusión y publicidad de las resoluciones jurisdiccionales de este Tribunal, y que se concreta en la obligación formal de la publicación de las resoluciones en el Boletín Oficial para dar la mayor accesibilidad y difusión pública.

Ni se trata de determinar la competencia para determinar si procede restringir la publicidad de una Sentencia constitucional, ni cabe hacer restricciones al acceso a las resoluciones ni recopilaciones jurisprudenciales por cualquier medio incluido el acceso a través de internet del contenido en los repertorios jurisprudenciales incorporados a la web del Tribunal Constitucional.

A esta Agencia le corresponde decidir acerca de la adopción de las medidas técnicas necesarias para impedir la indexación de tales resoluciones por los buscadores de internet –mediante la utilización del fichero “robots.txt”- solicitadas por la parte reclamante, y en este supuesto, se entiende que no afectan directamente a la publicidad y difusión de las resoluciones del Tribunal Constitucional como manifestación de la actividad jurisdiccional que desempeña, en los términos en que se encuentran configuradas constitucionalmente y en su Ley Orgánica, y si el derecho a la protección de datos como un derecho fundamental reconocido en la STC.

La protección que se da a la esfera privada del individuo es indispensable para el desarrollo de la personalidad, la vida privada no solo se restringe al ámbito privado o doméstico, el derecho a la privacidad de las personas también tiene que darse en el ámbito social, laboral, público, etc., con la reserva cuando se trate de personajes públicos o políticos e incluso de personas no públicas que puedan tener consecuencias para terceras personas o sean de interés general.



Por lo tanto, se debe también garantizar el derecho a la identidad y desarrollo personal y el derecho a establecer relaciones con otras personas y con el mundo exterior, por lo que en este sentido, en base a proteger la actividad de naturaleza profesional, comercial, social, etc. La finalidad consiste en el derecho a “*dejado a estar en paz*” y garantizar una esfera privada en que los demás no puedan entrar sin el consentimiento de la persona y que garantice el concepto básico de libertad.

Este valor jurídico protegido, es de ámbito propio y reservado de las personas para poder alcanzar una mínima calidad de vida humana, por lo que no se puede condenar de por vida un acto ilícito que ya fue saldado y el hecho de no proceder a limitar el acceso a las páginas web por las que se ha ejercitado el derecho, supondría que, una vez salda la cuenta con la sociedad se siguiera con la imposición del castigo, por lo cual, se quebraría el orden de justicia.

No pueden servir estos enlaces como un principio limitador para poder llevar a cabo una vida con plenos derechos y obligaciones. En este asunto, no queda justificada su denegación, como protección de otro bien constitucional.

Por lo tanto, al no ser un personaje de relevancia pública o política, ni se interpreta que afecta a terceros y dado que existe un dictamen del SERVICIO COMÚN DE EJECUTORIAS DE LA AUDIENCIA NACIONAL en el que se acuerda la prescripción de la pena con efectos el día 10 de julio de 2016 y certificación de ausencia de antecedentes, debe procederse a la supresión de los enlaces objeto de esta reclamación, de la lista de resultados.

Por todo ello, procede estimar la presente reclamación de Tutela de Derechos para que Google LLC adopte las medidas necesarias para evitar que las búsquedas de su nombre en las versiones europeas de los resultados de búsqueda de Google influyan en la clasificación de las mencionadas páginas.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

La Directora de la Agencia Española de Protección de Datos **RESUELVE:**

PRIMERO: ESTIMAR la reclamación formulada por doña **A.A.A.** contra **GOOGLE LLC**. instando a esta entidad a que adopte las medidas necesarias para evitar que su nombre se vincule en los resultados de las búsquedas a las URLs siguientes:

- *****URL.1**
- *****URL.2**

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a **GOOGLE SPAIN, S.L.**, como establecimiento del responsable en España para que dé traslado de la misma a Google LLC., y a doña **A.A.A.**.



De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del RLOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 18.4 de la LOPD), y de conformidad con lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, o, directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en lo sucesivo LJCA), en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos